Naciones Unidas S/PV.7392



Consejo de Seguridad

Septuagésimo año

Provisional

7392ª sesión

Martes 24 de febrero de 2015, a las 15.00 horas

Nueva York

Presidente:	Sr. Shen Bo	(China)
Miembros:	Angola	Sr. Gaspar Martins
	Chad	Sr. Gombo
	Chile	Sr. Olguín Cigarroa
	España	Sr. Oyarzun Marchesi
	Estados Unidos de América	Sra. Power
	Federación de Rusia	Sr. Iliichev
	Francia	Sr. Lamek
	Jordania	Sr. Hmoud
	Lituania	Sra. Murmokaitė
	Malasia	Sra. Adnin
	Nigeria	Sr. Laro
	Nueva Zelandia	Sr. Taula
	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	Sir Mark Lyall Grant
	Venezuela (República Bolivariana de)	Sr. Suárez Moreno

Orden del día

Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur

Informe del Secretario General sobre Sudán del Sur (S/2015/118)

15-05000 (S)







Se abre la sesión a las 15.05 horas.

Aprobación del orden del día

Queda aprobado el orden del día.

Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur

Informe del Secretario General sobre Sudán del Sur (S/2015/118)

El Presidente (*habla en chino*): De conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo, invitó al representante de Sudán del Sur a participar en esta sesión.

De conformidad con el artículo 39 del reglamento provisional del Consejo, invito al Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Sr. Hervé Ladsous, y al Subsecretario General de Derechos Humanos, Sr. Ivan Šimonović, a participar en esta sesión.

El Consejo de Seguridad iniciará ahora el examen del tema que figura en el orden del día.

Deseo señalar a la atención de los miembros del Consejo el documento S/2015/118, que contiene el informe del Secretario General sobre Sudán del Sur.

Tiene ahora la palabra el Sr. Ladsous.

Sr. Ladsous (*habla en francés*): Sr. Presidente: Le agradezco la oportunidad que me ofrece para presentar el informe más reciente del Secretario General sobre Sudán del Sur (S/2015/118), publicado el 17 de febrero. Como siempre, aprovecharé esta oportunidad para informar al Consejo sobre cómo han evolucionado los aspectos operacionales desde entonces.

Como saben los miembros del Consejo, la situación de seguridad en Sudán del Sur es muy preocupante. Se han informado y comprobado numerosas violaciones del Acuerdo sobre el Cese de las Hostilidades, firmado el 23 de enero de 2014, hace más de un año, así como múltiples enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno y las de la oposición, en particular en los estados de Unidad y el Alto Nilo. El 10 de febrero, en el estado de Unidad, se informó sobre numerosos bombardeos en la región de la Madrassa, al suroeste de Bentiu. El Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA) informó haber abierto fuego contra efectivos del SPLA en la Oposición que avanzaban sobre la ciudad de Bentiu. Nuestras fuerzas no han podido confirmar este avance sobre las líneas de defensa que rodean a Bentiu. Por otra parte, el 13 de febrero, el SPLA también capturó al menos cinco miembros del ejército de la oposición tras los enfrentamientos ocurridos entre Bentiu y Guit. Esas cinco personas siguen detenidas.

Asimismo, en el estado del Alto Nilo, en la región de Nasir, más allá del rio Sobat, entre los días 8 y 17 de febrero, la situación de seguridad se caracterizó por el constante intercambio de disparos entre el SPLA y la oposición armada. Por otra parte, en los últimos 10 días se ha informado sobre nuevos enfrentamientos en los condados de Maban, Melut y Manyo. Los enfrentamientos en esos estados indican claramente que los campos de petróleo allí ubicados siguen siendo los objetivos principales de las fuerzas de la oposición armada.

Al mismo tiempo, ambas partes continúan movilizando y desplegando nuevos reclutas en preparación para nuevos enfrentamientos, en momentos en que la actual temporada seca abre nuevas vías para la comunicación y el traslado de soldados y equipos. El 15 de febrero, la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) recibió informes de que hombres armados, probablemente pertenecientes a una milicia shilluk, afín al Gobierno, habían reclutado por la fuerza a por lo menos 89 niños en campamentos de desplazados internos del condado de Malakal, estado del Alto Nilo. Testigos presenciales informaron al UNICEF de que hombres armados habían rodeado toda la zona mientras buscaban casa por casa a los niños mayores de 12 años.

Mientras tanto, en el condado de Pibor, estado de Jonglei, la lenta integración de las fuerzas murle y el hecho de que no hayan llegado los recursos financieros prometidos a la Zona Administrativa del Gran Pibor, pueden desestabilizar el acuerdo concertado el 28 de marzo entre facción Cobra del Ejército de Defensa de Sudán del Sur, que encabeza David Yau Yau, y el Gobierno. El General Joshua Konyi fue nombrado Comandante del SPLA en la región, lo cual atizó las tensiones ya que el General Konyi, antiguo Comisionado del condado de Pibor, había trabajado en estrecha cooperación con el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés contra las fuerzas de David Yau Yau en la región. Después, recibimos informes según los cuales la comunidad Murle había llegado a un acuerdo con los Lou-Nuer, lo que sería algo inhabitual, para impedir que los contingentes del SPLA se desplacen por la región en el caso de que éstos últimos pensaran realizar maniobras en las regiones controladas por la oposición armada. De hecho, los riesgos de que el conflicto se propague en los próximos meses a los condados de Pibor y Akobo, en el estado de Jonglei son bien reales.

Asimismo, en la región de Equatoria, han aumentado las tensiones, con la entrada masiva de nómadas dinka fuertemente armados procedentes de los estados de Jonglei y de Lagos, con 250.000 cabezas de ganado, para instalarse en las tierras cultivables de sus vecinos. Evidentemente ello constituye la referencia a los enfrentamientos tradicionales en las regiones de pastizales situadas en el sur de los estados de Lagos y de Jonglei. Sin embargo, queda claro que esos focos de tensión pueden fácilmente transformarse en zonas de conflicto.

Por último, las controversias políticas internas en el Gobierno de coalición en los estados de Bahr el-Ghazal Septentrional y Occidental han generado un fenómeno un poco cuestionable, con la recusación del Gobernador interino y paralelamente del Presidente de la Asamblea Legislativa local. Todas esas tensiones podrían también generar conflictos entre las comunidades Bahr el-Ghazal Septentrional y Occidental, aunque esos dos estados habían sido hasta el momento estados relativamente pacíficos a pesar de lo que venía ocurriendo en otras partes del país.

(*continúa en inglés*)

El entorno de seguridad volátil demuestra directamente la constante falta de voluntad política de las partes. El Gobierno y la oposición al parecer no toman en serio las negociaciones políticas ni parecen estar dispuestos a hacer las concesiones necesarias. La situación de las conversaciones de paz celebradas en Addis Abeba no puede calificarse de ningún otro modo que no sea de fracaso grave de los dirigentes que siguen centrándose en su búsqueda de poder y no en cuidar de su pueblo. Las conversaciones se han estancado por tres cuestiones: el reparto de poder, las medidas de seguridad y las reformas constitucionales. La probabilidad de que una u otra parte ceda en su postura sigue siendo poca.

Los miembros del Consejo habrán observado que, el 21 de enero en Arusha, las partes firmaron un acuerdo para unir al Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés, tras las conversaciones facilitadas por Chama Cha Mapinduzi, que al parecer es el partido gobernante en Tanzanía. El 16 de febrero, las partes firmaron otro documento, incluida la matriz de la hoja de ruta con plazos concretos, para aplicar el Acuerdo de Arusha; pero en vista del entorno que prevalece y las posturas intransigentes expresadas por el Presidente Kiir y el Sr. Machar, se duda mucho de que realmente se aplique la matriz.

La semana pasada, el 13 de febrero, el Gobierno anunció que aplazaría las elecciones generales y presidenciales por dos años y propuso a la Asamblea Legislativa Nacional que realizara una enmienda constitucional por la que se prorrogara el mandato del Presidente y de la Asamblea Legislativa Nacional hasta el 9 de julio de 2017. El 19 de febrero, el Gobierno presentó la propuesta de un proyecto de ley para la enmienda de la Constitución de Transición de 2011 a los miembros de ambas cámaras, a quienes se les interrumpió el descanso para que participaran en una sesión extraordinaria. Los miembros de ambas cámaras tienen ahora un mes para analizar la propuesta, tras lo cual el proyecto de ley requeriría la aprobación de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, que sesionan por separado. Habida cuenta de que el Gobierno goza de la mayoría de los escaños en la Asamblea Legislativa, probablemente se apruebe esa propuesta. Esa medida responde a lo que se había percibido como estrategia de la oposición para poner en tela de juicio la legitimidad del Gobierno y del Presidente después de junio de este año, y hacerlo oficialmente para que no tuvieran que negociar bajo presión. Por supuesto, está la preocupación de que este plazo de dos años se convierta en otro incentivo más para dilatar el tener que llegar a avenencias necesarias para un acuerdo de paz.

Por último, tengo que insistir en la limitación del espacio y de las libertades políticas, lo cual es preocupante. Se han detenido y acusado a periodistas por haber criticado al Gobierno. El periódico *Nation Mirror* fue cerrado el 3 de febrero, tras publicar un artículo en el que se decía que las fuerzas del Gobierno habían abandonado a un pueblo importante cerca de la frontera internacional con el Sudán. El 16 de febrero, hasta *Radio Miraya* de las Naciones Unidas fue amenazada con cerrarse de continuar entrevistando a dirigentes de la oposición. Desde entonces, la Representante Especial Ellen Løj ha planteado esa situación en una reunión con el Ministro de Información de Sudán del Sur, pero seguimos sumamente preocupados por la tendencia general de que cada vez hay menos libertad de prensa en el país. Mientras tanto, se sigue impidiendo a los partidos políticos de la oposición que participen en las conversaciones de paz que se celebran en Addis Abeba.

Se corre el gran riesgo de que la situación humanitaria en Sudán del Sur se siga deteriorando en los próximos meses. Actualmente, hay unos 113.000 desplazados en 8 lugares, y hay 1,5 millones de desplazados más en todo el país, así como cerca de 500.000 fuera del país. A medida que continúan los enfrentamientos, aumenta el desplazamiento. Durante los dos años transcurridos solamente, unas 100.000 personas más fueron desplazadas a pesar del hecho de que ha sido un período de relativa

calma. El número de civiles que padece de inseguridad alimentaria se espera que aumente aún más a medida que se acerca la época de mayor escasez. Alrededor de 2,5 millones se encuentran ya en los niveles de emergencia y crisis de la inseguridad alimentaria, casi el doble del que existía en diciembre de 2013 cuando comenzó la crisis, y 3,9 millones de personas más se encuentran a los niveles de emergencia en lo que se refiere a la seguridad alimentaria. De conformidad con las pautas estacionales, se podría producir un deterioro drástico entre abril y julio de este año, cuando la temporada de mayor escasez llegue al máximo. Huelga decir que los estados asolados por conflictos corren mayor riesgo porque se han destruido los mercados y se han agotado de manera prematura las existencias de alimentos. Se están realizando todos los esfuerzos posibles por brindar asistencia a los necesitados. La inseguridad y el acoso, sobre todo para el personal que brinda asistencia humanitaria a nivel nacional, frenan los esfuerzos de respuesta.

Como dije en mi última exposición informativa, la UNMISS sigue aprovechando todas las ocasiones posibles para pasar de la protección por lugar a la protección por presencia. Se está haciendo hincapié cada vez más en la realización de patrullas dinámicas e integradas para aumentar la protección y tranquilizar a las comunidades locales y recopilar información indispensable para facilitar las respuestas idóneas y oportunas a las nuevas amenazas. El mes pasado solamente, la UNMISS llevó a cabo más de 5.000 patrullas en Sudán del Sur de distintas naturalezas: las patrullas aéreas de corta y larga duración, a pie, integrada y dinámica. La vasta mayoría de esas misiones se han centrado en la participación positiva y proactiva con las comunidades vulnerables fuera de nuestras bases.

Hemos establecido bases de operación temporales en centros demográficos clave como parte de esta estrategia. Por el momento, estamos analizando la posibilidad de establecer bases de operación avanzadas en Bentiu, Malakal y Bor, y buscar la aprobación de las autoridades locales con ese fin. Hemos elaborado planes para imprevistos en caso de que empeore la situación de seguridad. Estos planes dependen de que se mantengan las fuerzas de respuesta rápida a un alto nivel de disponibilidad para que puedan responder de manera rápida y firme. Se prevé que todos los batallones sean capaces de ejercer flexibilidad para actuar como refuerzos dondequiera que se los necesite en el país.

Actualmente contamos con unos 3.500 de los 5.500 efectivos recientemente autorizados que han sido desplegados, y un pleno despliegue de la infantería y de sus elementos facilitadores concluirá en abril, lo cual permitirá a la Misión ampliar su presencia en el país. Seis de los nueve helicópteros de uso general han sido desplegados, y nos estamos esforzando por desplegar unidades de helicópteros tácticos provenientes de Etiopía y de Rwanda. El despliegue de un batallón chino y más contingentes de Kenya está en marcha, y los efectivos restantes de Ghana y una unidad fluvial de Bangladesh también serán desplegados pronto, se espera que en abril.

Tengo que agregar que seguimos presenciando violaciones del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, como las limitaciones impuestas a la circulación, la congelación de activos, las amenazas a nuestro personal y locales, los asaltos, el acoso, los arrestos, las detenciones y las restricciones a la importación de equipo, incluso, durante cierto tiempo, del equipo para los contingentes chinos y etíopes. Parece que estas violaciones se están corrigiendo, pero aún no lo hemos corroborado sobre el terreno. Ayer distribuí un folleto con información sobre las violaciones del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas para que el Consejo tenga un análisis detallado de todo lo que ocurrió en enero.

Entonces, tenemos un entorno de seguridad muy frágil y una ronda de conversaciones de paz en curso que no parece que vaya a lograr muchos avances. Creo que ahora, más que nunca, es menester reforzar con urgencia los esfuerzos de mediación e imponer consecuencias a las partes si no muestran la voluntad de llegar a un acuerdo y siguen participando en un conflicto que se cobrará más vidas inocentes. Incluso más importante en este sentido es la necesidad de exigir que se rindan cuentas por crímenes de guerra y de lesa humanidad, que no pueden quedar impunes. La rendición de cuentas es indispensable para la paz y la reconciliación a largo plazo. La cultura de impunidad tiene que terminar, y aquellos responsables de perpetuarla deben ser enjuiciados. Como acaban de reanudarse las conversaciones de paz, insto al Consejo a que quizás baraje la posibilidad de emitir una firme declaración de la Presidencia mediante la que pida a las partes que pongan fin de inmediato a toda operación militar y que hagan los compromisos necesarios para llegar a un acuerdo de paz integral durante esta ronda de conversaciones o, de lo contrario, que afronten las consecuencias.

El Presidente (*habla en chino*): Doy las gracias al Sr. Ladsous por su exposición informativa.

Tiene ahora la palabra el Sr. Šimonović.

Sr. Šimonović (*habla en inglés*): Le doy las gracias por la oportunidad de dirigirme al Consejo, Sr. Presidente.

Hace un par de semanas, regresé a Sudán del Sur después de un año de ausencia. Visité las zonas controladas por el Gobierno y aquellas con las que se ha hecho la oposición. Si bien la escala y la gravedad del conflicto han disminuido recientemente, el número de desplazados y refugiados sigue en aumento, alcanzando los 2 millones, con miles más de civiles muertos. Ambas partes han perpetrado más violaciones del derecho humanitario y del derecho relativo a los derechos humanos, como se describe en los informes sobre los derechos humanos publicados por la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) en diciembre y en enero. Ahora hay más personas, más de 110.000, sobre todo mujeres y niños, que acuden a nuestros emplazamientos de protección de civiles en busca de protección. Los desplazados me han dicho que están aterrorizados. No tienen adónde ir, y parece que ambas partes están armándose de nuevo y preparándose para una nueva campaña militar.

En Juba, me reuní con personas cuyas familias enteras habían sido ejecutadas, principalmente debido a su origen étnico, así como mujeres y niñas que fueron víctimas de la esclavitud sexual después de que mataran a sus maridos. En Malakal, había una mujer cuyo marido discapacitado, un médico, murió de un disparo en un hospital universitario el pasado abril, junto a centenares de otros. En Bentiu, visité un hospital donde en abril un grupo de civiles que buscaban resguardo fueron llevados a un pequeño cuarto, donde los mataron a tiros. Cuando volvía del hospital, vi a niños soldados y soldados borrachos en un puesto de control, que gritaban y se burlaban de un grupo de mujeres civiles. Las mujeres salen a escondidas del emplazamiento de protección de las Naciones Unidas durante el día para ir a buscar leña e ir al mercado, y volver al campamento por la noche. Se me informó de que a algunas de ellas se las acosa y se las viola.

Además del conflicto entre el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA) y el SPLA en la Oposición, hay otros tantos conflictos locales en el país entre tribus e incluso entre clanes de una misma tribu. Estos comprenden saqueos y robo de ganado, pero también matanzas y violencia sexual. Hay una posesión generalizada de armas ilegales, incluidos AK-47s, lo cual solo exacerba la inseguridad. Muchos funcionarios del Gobierno me han dicho que el pueblo de Sudán del Sur luchó durante decenios en defensa de su dignidad, su independencia y sus derechos humanos. Lo que yo vi en mi misión innegablemente no fue la causa por la que luchaban. Tras decenios de matanzas y otras violaciones, se necesita un cambio cultural que se base en el respeto de la vida humana y de los derechos humanos. Si bien se necesitan dos dirigentes para poner fin a la guerra en Sudán del Sur, se precisan muchos para que la paz sea sostenible. El actual proceso de paz y los futuros arreglos políticos deben incluir a representantes de todos los grupos étnicos, mujeres, ancianos, dirigentes religiosos, jóvenes y otros integrantes de la sociedad civil.

El conflicto no solo ha afectado los derechos civiles y políticos, sino que también ha tenido graves consecuencias sociales y económicas. Millones de dólares que se habrían podido invertir en el desarrollo social se han desperdiciado primero en la corrupción y luego en combates entre dos grupos de excombatientes del ejército y sus líderes para llevarse el botín. Debido al hecho de que el comercio económico se ha suspendido, los Estados vecinos también han perdido millones, y la comunidad internacional ha tenido que invertir en el socorro de emergencia, en lugar de invertir en la consolidación de la capacidad y el desarrollo. Antes del conflicto, Sudán del Sur, un país con mucho petróleo, tenía un producto interno bruto anual de 1.045 dólares per cápita. A pesar de ello, sus niveles de analfabetismo y de mortalidad infantil y materna alcanzan los índices más altos del mundo.

Algunos hechos positivos dan la esperanza de que tal vez el futuro sea mejor. Al hablar con la gente, observé que se desean cada vez más la paz, la justicia, los derechos humanos, el desarrollo social y la participación política. Representantes del total de las 65 tribus se reunieron la semana pasada en Juba para dar a conocer exigencias parecidas. Alentaron a las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, la troika de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional a que impongan sanciones que no pesen sobre el país, sino sobre las partes y las personas que se nieguen a firmar los acuerdos o a respetar la paz. El Gobierno también ha contraído importantes compromisos sobre derechos humanos, y acojo con beneplácito la ratificación de una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos. El Presidente Kiir me ha asegurado que en los próximos días los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario General.

Permítaseme pasar ahora a hablar de la cuestión de la rendición de cuentas. Se ha reconocido ampliamente, tanto dentro como fuera de Sudán del Sur, la necesidad de poner coto al ciclo de impunidad tomando medidas concretas para la rendición de cuentas. Como me dijo un activista local, la paz siempre ha perecido cuando hacemos caso omiso de la justicia. La Unión Africana

ha tomado una importante iniciativa al establecer una comisión de investigación de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en Sudán del Sur tras el brote de violencia ocurrido en diciembre de 2013. Su informe ha sido presentado al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, pero su examen ha sido aplazado, como lo explicó ese Consejo, hasta la conclusión inminente del acuerdo de paz. En su reciente informe al Consejo de Seguridad (S/2015/118), el Secretario General pidió a la Unión Africana que examinara con urgencia el informe y sus recomendaciones.

Analicé las cuestiones relativas a la responsabilidad del mando, la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad con el Presidente Kiir, en Juba, y con el Sr. Machar, en Addis Abeba. El Presidente Kiir me aseguró que los resultados de las investigaciones nacionales sobre las violaciones de los derechos humanos tras el estallido de la violencia, que se le presentó en diciembre de 2014, se publicará en breve, sin embargo, solo después que se haya concertado un acuerdo de paz.

Acojo con beneplácito las referencias a la rendición de cuentas en los acuerdos firmados recientemente Arusha y Addis, en los que se enuncia la creación de un tribunal penal híbrido y la instauración de procesos de justicia de transición, que incluye medidas para la verdad y la reconciliación y una comisión de reparaciones. De hecho, una rendición de cuentas sólida por las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el conflicto es la única manera de evitar su recurrencia.

Pero para poder cumplir en este sentido, es preciso mejorar los sistemas de seguridad y justicia. El sistema de justicia oficial, de por sí deficiente, se ha desarticulado por completo en las zonas afectadas por el conflicto. Oí al Presidente del Tribunal Supremo decir que, en todo el país, hay menos de 200 jueces. En el estado de Equatoria Oriental, que es más grande que muchos países europeos, solo hay dos fiscales. El Jefe de la Policía Nacional me dijo que el 70% de los agentes de policía son analfabetos y que, por consiguiente, apenas puede contar con 3.000 de un total de 10.000 para que cumplan sus funciones relacionadas con el orden público.

Cuando visité a los presos condenados a muerte en la Penitenciaría Central de Juba, uno de ellos se me quejó de que debería ser liberado de inmediato porque había pagado una “indemnización”. El director de la prisión le había prometido liberarlo si su argumento podía confirmarse.

Reviste suma importancia que el Consejo siga ocupándose de la cuestión relativa a la rendición de cuentas por las violaciones pasadas y presentes del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas en Sudán del Sur. Es importante seguir alentando al Gobierno a que divulgue los resultados de sus propias investigaciones, y alentar a la Unión Africana a que publique el informe de la Comisión de Investigación. Juntos, estos informes pueden ser la base de un proceso de rendición de cuentas que puede contribuir a poner fin al ciclo de violencia e impunidad y allanar el camino para la reconciliación y la paz sostenible.

Entretanto, para poder lograr la paz, es indispensable que haya un entorno propicio. Para contribuir a ello, el Consejo quizá desee alentar entre las partes la adopción de medidas de fomento de la confianza centradas en los derechos humanos. Cabe citar entre otras, cooperar en la búsqueda de desaparecidos; ayudar en la reunificación familiar; y garantizar el acceso a todos los detenidos relacionados con el conflicto y su liberación por ambas partes con arreglo al principio de “todo por todos”.

También, es fundamental entablar un diálogo libre e inclusivo para alcanzar la paz sostenible y edificar una sociedad democrática. Las restricciones actuales de la libertad de expresión impuestas a la sociedad civil y los medios de comunicación locales son muy preocupantes en este sentido. Como mencionó el Secretario General Adjunto, Sr. Ladsous, ha habido detenciones de periodistas y también amenazas contra ellos, y se han confiscado y se han cerrado periódicos. Más recientemente, ha habido amenazas de cerrar incluso la propia estación de radio de las Naciones Unidas en el país, Radio Miraya.

No deben escatimarse esfuerzos para alcanzar la paz cuanto antes. Los que están en los campamentos son los 110.000 afortunados a quienes alimentamos y protegemos; el resto de los casi 2 millones están mucho peor. Por ejemplo, hay un grupo de 260 personas desplazadas que residen en un edificio abandonado en Malakal, que esperan encontrar un espacio en nuestro centro de protección de los civiles, que ya están hacinados. Después de ser víctimas de ataques brutales y sin poder llegar a nuestro centro de protección en ese lugar, personas desplazadas, entre las que hay ancianos, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y niños, caminaron 100 kilómetros desde el estado de Jonglei. En su mayoría son mujeres, porque muchos hombres han sido asesinados. Como me dijo su jefe, que había sido detenido y torturado, “la mayoría de ellas perdieron a sus maridos, han sido violadas, o ambas cosas. Pero esperan un futuro mejor para sus hijos”.

El Presidente (*habla en chino*): Doy las gracias al Sr. Šimonović por su exposición informativa.

Tiene la palabra el representante de Sudán del Sur.

Sr. Deng (Sudán del Sur) (*habla en inglés*): Sr. Presidente: para comenzar, permítame felicitarlo por haber asumido la Presidencia durante el mes de febrero. Aunque el mes está muy avanzado, deseo asegurarle que cuenta con la plena cooperación de nuestra delegación.

Quisiera asimismo, darle las gracias a usted, Sr. Presidente, y también a los miembros del Consejo de Seguridad por haberme ofrecido la oportunidad de dirigirme al Consejo para abordar esta cuestión de primordial importancia para mi país. Debo confesar que lo hago con sentimientos encontrados.

Por una parte, agradecemos profundamente la contribución crucial que la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) aporta a nuestro país en esferas fundamentales y en circunstancias muy difíciles. La UNMISS surgió del firme apoyo y la solidaridad que la comunidad internacional demostró a nuestro nuevo país, que quedó devastado y vulnerable tras medio siglo de guerra. Este apoyo inicial se expresa ahora en la asistencia que se presta al país para responder a la crisis que estalló a mediados de diciembre de 2013 y pronto se convirtió en una guerra civil en toda regla.

Por otra parte, el panorama que se describe en el informe (S/2015/118) es muy preocupante y constituye un desafío para nuestro orgullo, nuestra dignidad y el valor de nuestra independencia y soberanía. Esto, por supuesto, debe intensificar nuestra motivación para encontrar una solución con sentido de urgencia, en colaboración con nuestros asociados regionales e internacionales. Pero para nuestro Gobierno y el pueblo, también supone sentimientos paradójicos sobre nuestro lugar en la comunidad internacional y nuestras relaciones con los que tienen la buena voluntad de ayudar al país y a su pueblo que sufre.

Como ya he señalado en reiteradas ocasiones en el Consejo, por dolorosas que son las noticias sobre la violencia y las violaciones graves de los derechos humanos en nuestro país, no queremos estar a la defensiva ni negarlo. Muy por el contrario, como acabo de indicar, reconocemos y agradecemos que todo esto es una manifestación del apoyo que la comunidad internacional demuestra a nuestro atribulado país y a nuestro pueblo que sufre. La pregunta fundamental es: ¿qué podemos hacer juntos para hacer frente a esta crisis nacional?

Al leer el informe del Secretario General y escuchar las declaraciones que acaban de formularse, me han sorprendido dos elementos que pueden servir de base para la colaboración a la hora de resolver la crisis. En primer lugar, existe la impresión de que hay turbulencia en todo el país. Sabemos que mientras tres estados se ven afectados por el conflicto, el resto del país, siete estados, disfruta de relativa paz y armonía. En segundo lugar, la impresión que se transmite en el informe es que la comunidad internacional, mediante la UNMISS, es prácticamente quien gestiona la situación, y que el Gobierno incumple de manera patente su responsabilidad primordial de proteger y ayudar a sus poblaciones. Peor aún, parecería que la comunidad internacional se preocupa más por la población de Sudán del Sur que por sus dirigentes. Hay que ser testigo del dolor que el Presidente Salva Kiir siente y expresa sobre esta guerra sin sentido y el sufrimiento que se inflige a nuestro pueblo para entender hasta qué punto se preocupa por su país y todo su pueblo.

Hay que subsanar la discrepancia que existe entre la responsabilidad primordial del Estado y el apoyo complementario de la comunidad internacional, en este caso, la UNMISS. Aunque Sudán del Sur está ahora violentamente dividido entre el Gobierno y la oposición, es importante recordar que las autoridades fueron elegidas por voto popular y representan la legitimidad del Gobierno y la soberanía del país. Por supuesto, es prudente estar conectados con ambas partes y trabajar por un consenso nacional, pero las Naciones Unidas deben actuar en colaboración con el Gobierno actual para resolver los problemas prácticos que enfrenta el país.

Una cosa es condenar a los dirigentes del país y amenazar con la imposición de sanciones, que, como ya he tenido la oportunidad de decir al Consejo, solo generarán una relación de enemistad y agravarán la situación; y otra cosa, muy distinta, es reafirmar que la comunidad internacional fue a Sudán del Sur con la intención primordial de apoyar al país y que la evolución reciente de los acontecimientos en realidad puede socavar el carácter y la magnitud de ese apoyo, pero que es posible encontrar soluciones a fin de restaurar una base constructiva para una asociación en la estabilización y el desarrollo del país. Sería un irónico doble castigo para un país que ya padece una aguda crisis. Creo que sería apropiado que la UNMISS y el equipo de las Naciones Unidas en el país se reunieran con las autoridades competentes del país en el Gobierno a fin de examinar y planear estrategias sobre la manera más constructiva de abordar estas crisis y que, al mismo tiempo, utilizaran su entendimiento estratégico mutuo como base para llegar a la oposición armada.

Lo que en el informe no se cubre —o a lo que ni siquiera se hace referencia, presumiblemente debido a

su complejidad y sensibilidad— es la interrelación entre los conflictos del Sudán y Sudán del Sur, conflictos que desbordan sus fronteras y, paradójicamente, están vinculados. Cada país acusa al otro de apoyar a sus rebeldes, aunque ambos niegan las respectivas acusaciones en su contra. No obstante, a menos que esos conflictos internos sean abordados desde la perspectiva de la promoción de una paz regional general, los dos países no tendrán paz dentro de sus fronteras o entre sí. Soy consciente de que quizá esto sea pedir demasiado al Consejo y a los dos países, pero es una perspectiva que no debe ignorarse.

Huelga decir que no estoy esperando ningún milagro en la búsqueda de soluciones a estos desafíos. Lo que propongo es evitar la impresión de que son las Naciones Unidas las que prácticamente gobiernan el país, de que el Gobierno está incumpliendo su responsabilidad primordial de proteger a su población y de que no existen políticas, planes o programas nacionales para hacer frente a la crisis que atraviesa el país. También creo que es necesario poner la crisis en el contexto regional para impulsar una cooperación regional más amplia, en particular, entre el Sudán y Sudán del Sur. A fin de crear una base común para esa visión, que sin duda es ambiciosa, conviene a todos mejorar la comunicación, la cooperación y la complementariedad al hacer frente a los desafíos en el interior de Sudán del Sur y en su relación con el Sudán.

El Presidente (*habla en chino*): No hay más oradores inscritos en la lista. Invito ahora a los miembros del Consejo a celebrar consultas oficiosas para proseguir el examen del tema.

Se levanta la sesión 15.45 horas.